**JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NÚMERO SIETE DE VALENCIA**

PROCEDIMIENTO: ABREVIADO N° 000043/2022

SENTENCIA N° 235/22

En Valencia a veinte de octubre del dos mil veintidós

Vistos por mí Doña Rosa Sonsoles Hernández González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N° 7 de Valencia, el presente Recurso Contencioso-Administrativo Procedimiento Abreviado registrado con el Núm 43/22, promovido por [REDACTED], representado y asistido por la Abogada Doña [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] contra EL AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT representado y asistido por la Letrada Doña [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y como codemandada LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, representada y asistida por la Abogada Doña [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con base a los siguientes;

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la representación de la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo con base a los hechos y fundamentos que estimó de aplicación para terminar suplicando que, previos los trámites legales, se dicte sentencia que anule y deje sin efecto la resolución sancionadora, con expresa imposición de costas a la desdemandada.

SEGUNDO.- Que admitido a trámite que fue, se acordó señalar día y hora para la celebración de vista por los trámites del procedimiento abreviado previsto en el art.78 de la Ley 29/98, de 13 de julio, en cuyo día se celebró, con asistencia de las partes, ratificándose la demandante en los fundamentos de su pretensión, oponiéndose la demandada y codemandada con base igualmente a las alegaciones que estimó de procedencia, recibiendo seguidamente el procedimiento a prueba, practicándose la que fue declarada pertinente, con el resultado que obra en autos.

TERCERO.- Que en la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, quedando los autos para sentencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Que es objeto del recurso contra la Diligencia de Embargo dictada por la Diputación de Valencia por importe de 268,43 €, que pudiera haber sido dictada a raíz de la Providencia de apremio y aviso de embargo, tras formularse denuncia de Tráfico, de fecha 13 de febrero del 2020, con núm. De expediente 2020000151, por el Ayuntamiento de Rocafort, contra la que también se impone este recurso. Viniendo a solicitar se anule y se deje sin efecto lo acordado, la imposición de la sanción, la providencia de apremio y la diligencia de embargo y se condene a la Corporación demandada y a la Diputación a estar y pasar por tal declaración y se acuerde el reembolso de las cantidades objeto de embargo.

SEGUNDO.- Prima facie hemos de proceder a resolver sobre la inadmisibilidad parcial del recurso por extemporáneo, en virtud de lo establecido en los arts. 69.c) y 45 de la LRJCA. Toda vez sólo se puede entenderse el presente dirigido contra la providencia de apremio y la sanción notificada por Decreto del Ayuntamiento. Y ello por cuanto el Decreto nº 1354 de fecha 20 de julio, es un acto firme y consentido, toda vez que no fue recurrido en momento alguno por el recurrente.

Así se constata en el expediente administrativo, que las notificaciones se efectuaron en el domicilio indicado por el propio recurrente, haciendo este por su propia voluntad y decisión inviable cualquier notificación, al dejar caducar el tiempo para ello.

En virtud de lo expresamente establecidos en el art.11 del R D Legislativo 6/2015, establece que: *"1. El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones: a) **Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de cometerse una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Si el conductor no figura inscrito en el aludido Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá disponer de copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento...***

Que consta debidamente acreditado y así lo ha reconocido que en fecha 11 de marzo del 2020, se le notificó personalmente el Decreto de incoación del procedimiento sancionados pag.16-20 y 29 Exp Ayuntamiento demandado; efectuando alegaciones en cuanto a la persona que conducía el vehículo en día de la sanción de tráfico, el recurrente omitió el DNI o en caso el de conducir, por lo que se consideró no identificado el conductor, debiendo de ser sancionado el titular, ante la falta de actuación.

Siendo en este momento cuando notificado en el domicilio designado, dejó caducar todas y cada una de las notificaciones practicadas, efectuándose a través del BOE de conformidad con el art. 112 de la Ley General Tributaria.

Siguiéndose el procedimiento sancionador, con notificación a través del BOE, con lo cual la Providencia de apremio causó igualmente firmeza, al ser un acto consentido y firme.

TERCERO.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto del presente recurso se centra en cuanto a la impugnación lo es contra la Diligencia de embargo dictada por el codemandada la Diputación de Valencia, quien es quien asume la recaudación por vía de apremio la resolución recaída en el expediente sancionador tramitado por el Ayuntamiento demandado.

En este orden de cosas y tras el análisis de la prueba realizada, así como de lo expresamente contenido en el expediente administrativo, procede la desestimación de la demanda en su totalidad interpuesta por la demandante. Habida cuenta, que con el presente recurso, se pretende la declaración de nulidad del expediente sancionador por la sanción de tráfico acaecida en fecha 13-02-2020, sin que pueda tener efecto retroactivo alguno la presentación del recurso, a actos que han devenido firmes y consentidos, al no haber sido debidamente recurridos en tiempo ni en forma, vía administrativa.

Constando ya la resolución efectuada por la Diputación en cuanto al recurso de reposición interpuesto contra la Diligencia de embargo, que ratificamos en sus propios fundamentos, dado la falta de actividad probatoria o argumental de la demandada a quien le corresponde la carga de la prueba, al ser un principio consagrado en el art. 217 de la LEC, como supletoria de este tipo de procedimientos. Así, como el carácter meramente revisor de la jurisdicción contencioso-administrativo, en la aplicación de la estricta legalidad de los actos dictados por las administraciones

CUARTO.- Que en cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, tras la redacción operada en el mismo por la Ley 137/2011, procede la condena en costas de la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente desestimadas, a la parte demandante al observar su mala fe y temeridad.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general pertinente aplicación,

FALLO

QUE PROCEDE LA INADMISIÓN PARCIAL del recurso interpuesto por [REDACTED] contra la providencia de apremio de fecha y la sanción impuesta, por extemporaneidad.

Y DESESTIMO el recurso interpuesto de [REDACTED] contra La Diligencia de Embargo con número de referencia:003949400250, que se ratifica en su totalidad al ser conforme a derecho. Con expresa condena en costas procesales a la demandante.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO CABE interponer recurso ordinario alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 a) y 81.1.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo

PUBLICACIÓN.- Se hace constar que la anterior Sentencia ha sido leída y publicada por la Iltma. Magistrada-Juez que la suscribe, en el día de la fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo cual doy fe.